

CONGRESO NACIONAL

CAMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS DE 2016

ANEXO AL ORDEN DEL DIA N° 382

Impreso el día 22 de junio de 2016

SUMARIO

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL; DE PRESUPUESTO Y HACIENDA; DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS Y DE ECONOMIA NACIONAL E INVERSION

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se crea el Programa Nacional de Reparación Histórica para los Jubilados y Pensionados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal. (C.D.24/16)

Dictamen de Minoría

Honorable Senado:

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos y de Economía Nacional e Inversión han considerado el expediente CD-24/16 de fecha 16 de Junio de 2016, proyecto de Ley de modificación al Régimen Fiscal y Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LIBRO I: SISTEMA PREVISIONAL

TÍTULO I: Plan Nacional de Regularización de Deudas Previsionales

ARTÍCULO 1.- Créase el PLAN NACIONAL DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS PREVISIONALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (en adelante el PLAN), con el objeto de reajustar los haberes sobre los que existieran discrepancias en cuanto a su cálculo y cancelar las deudas previsionales.

ARTÍCULO 2.- Integrarán el PLAN:

- a) Los titulares de un beneficio previsional cuyo haber inicial se hubiera calculado por los métodos previstos en el artículo 49 de la Ley N° 18.037 (T.O.1976) y sus modificatorias, o en los artículos 24, 97, o 98 de la Ley N° 24.241 y sus complementarias y modificatorias;
- b) Los titulares de un beneficio de pensión directa o derivada, cuyo derecho tenga como antecedente previsional el derivado de los individualizados en el inciso anterior.

ARTÍCULO 3.- Los pagos de las sentencias firmes previstas en el presupuesto de la administración pública nacional para el año 2016 quedan exceptuados del presente PLAN y deberán ser cumplidos según lo dispuesto en las respectivas sentencias.

ARTÍCULO 4.- Las sentencias de 1ra y 2da instancia serán inapelables por parte de la ANSES y deberán ser incluidas en el presupuesto de la administración pública nacional para el año 2017 para su efectivo cumplimiento.

ARTÍCULO 5.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) identificará en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos desde la fecha de vigencia de la presente Ley, cada uno de los casos correspondientes a los titulares de un beneficio previsional comprendidos en el artículo 2 de la presente ley que no tuvieran un reclamo judicial pendiente y realizará el recálculo del haber inicial, la movilidad y las acreencias, constituidas por las diferencias devengadas mes a mes entre el haber reajustado y el haber percibido desde el otorgamiento del beneficio, que incluirán el capital con más los intereses, hasta el efectivo pago, calculados de conformidad con la Tasa Pasiva Promedio que publica el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, respetándose lo dispuesto en las Leyes Nros. 23.982, 24.130 y 25.344 y su modificatoria, y en el inciso a) del artículo 12 de la reglamentación del Capítulo V de la citada Ley N° 25.344, aprobada como Anexo IV por el Decreto N° 1.116 del 29 de noviembre de 2000 y sus modificatorios. Para el recalcu del haber inicial y la movilidad se aplicarán estrictamente los parámetros que surgen de los fallos SÁNCHEZ, MONZO, BADARO I y II y ELLIFF según corresponda a cada caso particular.

ARTÍCULO 6.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) deberá abonar a cada uno de los titulares de un beneficio previsional comprendidos en el Artículo 2 que no tuvieran reclamo judicial pendiente, el haber reajustado de acuerdo a los criterios definidos en el Artículo precedente.

ARTÍCULO 7.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) deberá ejecutar las acreencias que resulten de lo dispuesto en el artículo 5 en un tiempo no mayor a los TRES (3) años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, debiendo comenzar a ejecutar el pago de un tercio de los casos cada año, dando prioridad a la fecha de inicio del expediente, los casos de mayor edad y/o que padezcan una enfermedad terminal cuyo desarrollo o desenlace pueda frustrar la finalidad de la presente Ley.

ARTÍCULO 8.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) deberá informar a cada uno de los beneficiarios del PLAN los montos totales de las acreencias con cada uno. El plazo máximo para liquidar la totalidad de las mismas es de TRES (3) años.

ARTÍCULO 9.- Con relación al cálculo del impuesto a las ganancias, se establece lo siguiente:

- a) Respecto del retroactivo que se abone, el capital se computará como si las sumas adeudadas hubieran sido abonadas en el mes en que se devengaron.
- b) Respecto del importe que corresponda abonar por actualización de dicho capital, el mismo estará exento del pago del impuesto a las ganancias.

TÍTULO II: Comisión Bicameral

ARTÍCULO 10º — Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la "COMISION BICAMERAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL CODIGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL".

ARTÍCULO 11º — La Comisión creada por el artículo anterior, tendrá a su cargo el estudio de las normas que considere necesarias, a fin de producir un cuerpo normativo codificado y homogéneo que tenga como objeto la seguridad social y el sistema previsional solidario, público y de reparto como único sistema.

ARTÍCULO 12º — La mencionada Comisión será integrada por seis senadores y seis diputados elegidos por las respectivas Cámaras, respetando la proporcionalidad de la representación política de las Cámaras. El Presidente de la Comisión será designado a propuesta del bloque político de la oposición con mayor representación.

ARTÍCULO 13º — La Comisión deberá elevar un proyecto de ley de "Código de la Seguridad Social" en el plazo de tres años, a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser ampliado a pedido de la Comisión, debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.

ARTÍCULO 14º — La Comisión dictará su propio reglamento, se reunirá periódicamente y decidirá por mayoría.

ARTÍCULO 15º — Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo de la Secretaría de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social de la Nación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

ARTÍCULO 16º — La Comisión deberá convocar a las organizaciones de jubilados con personería jurídica; Magistrados; Organizaciones internacionales de la seguridad social que mantengan convenios con la ANSES y/o la Secretaría de Seguridad Social; organizaciones sindicales; organizaciones de profesionales vinculadas a la seguridad social y el Consejo Federal de Previsión Social (Co.Fe.Pre.S.), quienes emitirán, de forma no vinculante, informes, documentos y recomendaciones acordes al objeto de la Comisión.

TÍTULO III: Inclusión Previsional ("moratoria")

ARTICULO 17: Las mujeres que durante los tres (3) años de la entrada en vigencia de la presente ley cumplieran la edad jubilatoria

prevista en el artículo 37 de la ley 24.241 y fueran menores de 65 años, podrán optar por el ingreso en el régimen de regularización de deudas previsionales previsto en la ley 26.970 en las condiciones allí previstas. El plazo mencionado ut supra podrá ser prorrogado por igual término para los fines previstos en el presente artículo. Para el caso de los hombres, restablécese la vigencia del artículo 6° de la ley 25.994 y el decreto 1454/05 por, el término de un (1) año, el cual puede ser prorrogable por un (1) año más.

ARTÍCULO 17 BIS.- Sustitúyese el Artículo 1 de la Ley 26.970 por el siguiente:

“Los trabajadores autónomos inscriptos o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), en adelante monotributistas, que hayan cumplido a la fecha o cumplan la edad jubilatoria prevista en el artículo 19 de la ley 24.241 dentro del plazo de CUATRO (4) años desde la vigencia de la presente, podrán regularizar sus deudas previsionales conforme el régimen especial establecido en la presente ley.

Los trabajadores autónomos podrán regularizar su situación respecto de la deuda que mantengan por aportes mientras que los monotributistas, lo harán con relación a las deudas originadas en las cotizaciones previsionales fijas con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), haya sido incluida o no en regímenes de regularización de deudas vigentes.

En ambos casos, la referida deuda comprenderá las obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de 2005 inclusive y los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de consolidación de la misma y regirá por el término de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente.

La adhesión al régimen de regularización no obsta al cumplimiento del pago de los aportes y/o cotizaciones previsionales fijas, que hubiesen correspondido en el período enero del año 2006 hasta el último mes vencido anterior a la fecha de presentación de la solicitud de adhesión.”

ARTÍCULO 18.- Sustitúyese el Artículo 6 de la Ley 26.970 por el siguiente:

“La deuda que incluyan los trabajadores que se inscriban en el presente régimen, será calculada de acuerdo con el sistema de liquidación informático implementado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se compondrá por el capital adeudado por sus aportes previsionales y/o cotizaciones fijas, con más los intereses correspondientes.

Los trabajadores autónomos, para determinar el capital adeudado por sus aportes previsionales deberán considerar el valor que, para cada período mensual que correspondiere, se indica a continuación:

- a) Anteriores a octubre del año 1993: El del aporte vigente para la respectiva categoría al mes de junio del año 1994, conforme a lo establecido por la ley 24.476 y sus modificaciones.
- b) Posteriores a octubre del año 1993 y hasta diciembre del año 2005 inclusive: El del aporte para la respectiva categoría a la fecha de vencimiento original de la obligación.

A tal fin, deberá tenerse en cuenta la categoría mínima obligatoria en la que debió encuadrarse el trabajador autónomo o, en el caso de haber optado por una mayor, ésta última.

Los monotributistas determinarán su deuda considerando los valores de las cotizaciones previsionales fijas vigentes para cada período por el cual se regulariza la deuda, más los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de consolidación.

Las obligaciones omitidas —total o parcialmente— relativas a los conceptos y por los períodos indicados en este artículo, estarán exentas de sanciones administrativas, cualquiera sea su naturaleza e independientemente del estado procesal en que se encontrare su tramitación o sustanciación.

En el caso de trabajadores autónomos la deuda incluirá el capital omitido más los intereses resarcitorios de acuerdo con la tasa dispuesta por el artículo 37 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por todo el período de mora a partir del día 1° de abril del año 1993, inclusive, al valor vigente a la fecha de origen de cada una de las deudas, reducida en un cincuenta por ciento (50%). Idéntico tratamiento se aplicará a los monotributistas a partir de la vigencia del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

En ningún supuesto el importe total de los intereses por cada una de las deudas incluidas en la presente regularización podrá superar el treinta por ciento (30%) del capital que se cancela.

No se encuentran sujetas a reintegro o repetición, las sumas que con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se hayan ingresado en concepto de capital, intereses resarcitorios y punitivos y multas, por las obligaciones indicadas en el presente artículo."

ARTICULO 18 BIS: La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de sus respectivas competencias, dictarán las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente Título.

LIBRO II: EXTERIORIZACION Y REPATRIACIÓN VOLUNTARIA DE LA TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR

TÍTULO I: De la creación de los instrumentos

ARTICULO 19 — Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir instrumentos financieros denominados en dólares estadounidenses y determinar sus condiciones financieras al momento de su emisión.

Los fondos originados en la emisión a efectuarse serán destinados, exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos.

ARTICULO 20° — Autorízase al Banco Central de la República Argentina a emitir instrumentos financieros en dólares estadounidenses, que serán nominativos y endosables y serán destinados exclusivamente a la construcción de nuevas unidades habitacionales y/o refacción de inmuebles, en las condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina en su reglamentación.

TITULO II: Exteriorización y Repatriación voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior

ARTICULO 21° — Las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, inscriptos o no, podrán exteriorizar voluntariamente la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, en las condiciones previstas en el presente título.

La referida exteriorización comprende la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior al 31 de diciembre de 2015, inclusive. También podrá incorporarse la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior que resulte del producido de bienes existentes al 31 de diciembre de 2015.

ARTICULO 22° — La exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, a que se refiere el artículo precedente, se efectuará:

- a) Para el caso de tenencia de moneda extranjera en el país: mediante su depósito en entidades comprendidas en el régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones, dentro del plazo de seis (6) meses calendario, contados a partir del mes inmediato siguiente de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación que al respecto dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y en la forma que disponga la misma;
- b) Para el caso de tenencia de moneda extranjera en el exterior: mediante su transferencia al país a través de entidades comprendidas en el régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones, dentro del plazo fijado en el inciso anterior.

Cuando se trate de personas físicas o sucesiones indivisas, a los efectos del presente artículo será válida la normalización, aun cuando la moneda extranjera, que se pretenda exteriorizar se encuentre anotada, registrada o depositada a nombre del cónyuge del

contribuyente o de sus ascendientes o descendientes en primer grado de consanguinidad o afinidad.

ARTICULO 23° — El importe expresado en pesos de la moneda extranjera que se exteriorice estará sujeto a un impuesto especial con una alícuota del QUINCE POR CIENTO (15%) y deberá permanecer depositado a nombre del titular por un plazo no menor a UN año (1), siempre que no se afecte a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros que se mencionan en el Título I, Libro II de la presente Ley.

ARTICULO 24° — Queda comprendida en las disposiciones de este título la moneda extranjera que se encontrare depositada en instituciones bancarias o financieras del exterior sujetas a la supervisión de los bancos centrales u organismos equivalentes de sus respectivos países, o en otras entidades que consoliden sus estados contables con los estados contables de un banco local autorizado a funcionar en la República Argentina, a excepción de aquellas que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en sus "Listas GAFI de países con deficiencias antilavado -Roja, Negra, Gris oscurecida y Gris-" al 23 de octubre de 2015, y/o de aquellos países con los que la Argentina no posea acuerdos para el intercambio de información tributaria que hayan entrado en vigor antes del 31 de diciembre de 2015.

ARTICULO 25° — El goce de los beneficios que se establecen en la presente ley, estará sujeto a que el importe correspondiente a la moneda extranjera —incluidos los fondos originados en la realización de los bienes a que se refiere el segundo párrafo del artículo 22°— que se exteriorice, se afecte a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros que se mencionan en el Título I, Libro II, o abonen el impuesto especial establecido en el Artículo 23.

ARTICULO 26° — Los sujetos indicados en el artículo 21° que exterioricen tenencias de moneda extranjera en la forma prevista en el inciso b) del artículo 22°, deberán solicitar a las entidades indicadas en el artículo 24° en la cual estén depositadas las mismas, la extensión de un certificado en el que conste:

- a) Identificación de la entidad del exterior;
- b) Apellido y nombres o denominación y domicilio del titular del depósito;
- c) Importe del depósito expresado en moneda extranjera;
- d) Lugar y fecha de su constitución.

Las entidades financieras receptoras de las tenencias de moneda extranjera de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 22°, deberán extender un certificado en el que conste:

- a) Nombres y apellido o denominación y domicilio del titular;
- b) Identificación de la entidad del exterior;
- c) Importe de la transferencia expresado en moneda extranjera;
- d) Lugar y fecha de la transferencia.

ARTICULO 27° — Los sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este Título, no estarán obligados a

informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios:

a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con respecto a las tenencias exteriorizadas;

b) Quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria —con fundamento en la ley 23.771 y sus modificaciones, durante su vigencia, y la ley 24.769 y sus modificaciones— administrativa, penal cambiaria —dispuesta en la ley 19.359 (t.o. 1995) sus modificatorias y reglamentarias, salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso b) del artículo 1° de dicha ley— y profesional que pudiera corresponder, los responsables por transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de esta ley y las que tuvieran origen en aquéllas. Quedan comprendidos en esta situación los socios administradores y gerentes de sociedades de personas, directores, gerentes, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en cooperativas, fideicomisos y fondos comunes de inversión, y profesionales certificantes de los balances respectivos.

Este beneficio no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido perjudicados mediante dichas transgresiones;

c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Eximición del pago de los Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice.

2. Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas —o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada— por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar.

3. Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas.

4. Eximición del Impuesto a las Ganancias por las ganancias netas no declaradas, en su equivalente en pesos, obtenidas en el exterior, correspondientes, a las tenencias que se exteriorizan.

Asimismo, estarán exentos del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, los hechos imposables originados en la transferencia de la moneda extranjera que se exteriorice, así como también los que pudieran corresponder a su

depósito y extracción de las respectivas cuentas bancarias, previstos en los artículos 24° y 26° de la presente ley.

ARTICULO 28. — La exteriorización efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, liberará del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los socios, en proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en la misma.

Las personas físicas y sucesiones indivisas que efectúen la exteriorización prevista en este título, podrán liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares.

ARTICULO 29. — La liberación establecida en el inciso c) del artículo 27° no podrá aplicarse a las retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas.

ARTICULO 30. — A los fines del presente título deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.

ARTICULO 31. — Será requisito, para el usufructo de los beneficios que otorga la presente que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 1 de enero de 2016, de las obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2015, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria.

Las diferencias patrimoniales que el contribuyente deba expresar con motivo del acogimiento al presente régimen deberán incluirse en las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2015.

ARTÍCULO 32. - El gravamen del artículo 23 se registrará por lo dispuesto en la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones).

El producido del gravamen establecido en el artículo 23 se destinará a la ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), organismo descentralizado, en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTEYSS).

ARTICULO 33. — Ninguna de las disposiciones del Libro II de la presente ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria.

Quedan excluidas del ámbito del Libro II de la presente ley las sumas de dinero provenientes de conductas susceptibles de ser encuadradas en los términos del artículo 6° de la ley 25.246 relativas al delito de lavado de activos y financiación del terrorismo. Las personas físicas o jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del presente régimen establecido en el Título II, Libro II de la presente ley deberán formalizar la presentación de una declaración jurada al respecto; ello sin perjuicio de cualquier otra medida que resulte necesaria a efectos de corroborar los extremos de viabilidad para el acogimiento al presente.

En los supuestos contemplados en el inciso j), del punto 1 del artículo 6° de la ley 25.246 (Delitos de la Ley Penal Tributaria), la exclusión será procedente en la medida que se encuentre imputado.

ARTICULO 34. — Quedan excluidos de las disposiciones del Libro II de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:

- a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522 y sus modificaciones, o 25.284, según corresponda;
- b) Condenados por la ex Dirección General Impositiva de la entonces Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Producción, o por la Administración Federal de Ingresos Públicos, con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y, sus modificaciones, según corresponda, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley;
- c) Condenados por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;
- d) Los denunciados o querellados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente;
- e) Las personas jurídicas —incluidas las cooperativas— en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus modificaciones o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;
- f) Los que ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente en referencia exclusivamente al título II, Libro II, de la presente Ley en cualquiera de los poderes del Estado nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, los sujetos que se acojan al régimen establecido en el Título II, Libro II de la presente ley, deberán previamente renunciar a la

promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo con relación a las disposiciones del decreto 1043 de fecha 30 de abril de 2003, o para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ya hubieran promovido tales procesos deberán desistir de las acciones y derechos invocados en los mismos.

En el caso de la renuncia a la que hace referencia el párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando el fisco al cobro de multas.

ARTICULO 35. — La Administración Federal de Ingresos Públicos estará dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y sus modificaciones y 24.769 y sus modificaciones, según corresponda, así como el Banco Central de la República Argentina de sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en la ley 19.359 (t.o. 1995) y sus modificaciones —salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso b) del artículo 1° de dicha ley—, en la medida que los sujetos de que se trate adhieran al régimen previsto en el Título II, Libro II de la presente ley.

ARTICULO 36. — Suspéndese con carácter general por el término de UN (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.

ARTÍCULO 37.- No habrá ninguna limitación en el marco del régimen establecido en el Título II, Libro II de la presente Ley a la capacidad actual del Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas que pudiesen encuadrar en los artículos 303 y 306 del Código Penal.

La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA podrá, a su discreción, comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación.

ARTICULO 38. — La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el Título II, Libro II de la presente ley y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.

ARTICULO 39. — El Banco Central de la República Argentina será la Autoridad de Aplicación con respecto a los Certificados de Depósito de Inversión y dictará las normas reglamentarias y complementarias pertinentes, inclusive el procedimiento a seguir en caso de extravío o sustracción.

ARTICULO 40. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar los plazos previstos en el régimen establecido en el Libro II de la presente ley.

LIBRO III: MODIFICACIONES IMPOSITIVAS

TÍTULO I: Impuesto sobre los Bienes Personales

ARTÍCULO 41.- Derógase el inciso i) del artículo 21 del Título VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales N°23.966 (t.o. 1997) y sus modificaciones.

ARTÍCULO 42.- Sustitúyese el primer párrafo del inciso g) del artículo 22 del Título VI de la ley de Impuesto sobre los Bienes Personales N°23.966 (t.o. 1997) y sus modificaciones, por el siguiente texto:

“g) Objetos personales y del hogar, con exclusión de los enunciados en el inciso e): por su valor de costo. El monto a consignar por los bienes comprendidos en este inciso no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el 5% sobre la suma del valor total de los bienes gravados situados en el país y el valor de los inmuebles situados en el exterior sin deducir de la base de cálculo el monto previsto en el artículo 24 de la presente ley.”

ARTÍCULO 43.- Incorpórase como artículo 24 del Título VI de la ley de Impuesto sobre los Bienes Personales N°23.966 (t.o. 1997) y sus modificaciones, el siguiente:

“ARTICULO 24.- No estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados – excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley – pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17, cuando su valor en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten:

- a) Para el periodo fiscal 2016, iguales o inferiores a PESOS OCHOCIENTOS MIL (\$800.000)
- b) Para el periodo fiscal 2017, iguales o inferiores a PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL (\$950.000)
- c) Para el periodo fiscal 2018, iguales o inferiores a PESOS UN MILLÓN CINCUENTA MIL (\$1.050.000)
- d) Para el periodo fiscal 2019, iguales o inferiores a PESOS UN MILLÓN CIENTO DOS MIL QUINIENTOS (\$1.102.500)”
- e)

ARTÍCULO 44.- Sustitúyese el artículo 25 del Título VI de la ley de Impuesto sobre los Bienes Personales N°23.966 (t.o. 1997) y sus modificaciones, por el siguiente:

“ARTÍCULO 25.- El gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17, surgirá de la aplicación, sobre el valor total de los bienes gravados por el impuesto - excluidas las acciones y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades regidas por la Ley N° 19.550 (t.o. 1984 y sus modificaciones), con excepción de las empresas y explotaciones unipersonal- sobre el monto que exceda del establecido en el artículo 24 , de la alícuota que para cada caso se fija a continuación:

Valor excedente de los bienes Gravados	Alícuota aplicable
Más de \$800.000 a \$1.500.000	0,50%
Más de \$1.500.000 a \$2.000.000	0,75%

Más de \$2.000.000 a \$5.000.000	1,00%
Más de \$5.000.000	1,25%

Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior. “

TÍTULO II: Modificación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta

ARTÍCULO 45.- Sustitúyese el primer párrafo del inciso j) del artículo 3 del Título V de la ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta N°25.063 (t.o. 1997) y sus modificaciones, por el siguiente texto:

“j) Los bienes del activo gravado en el país cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con las normas de esta ley, sea igual o inferior a pesos novecientos mil (\$ 900.000). Cuando existan activos gravados en el exterior dicha suma se incrementará en el importe que resulte de aplicarle a la misma el porcentaje que represente el activo gravado del exterior, respecto del activo gravado total.”

LIBRO IV: ACUERDOS CON LAS PROVINCIAS Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TÍTULO I: Ratificación de Acuerdos

ARTÍCULO 46.- Ratifícase el Acuerdo suscripto con fecha 18 de mayo de 2016 entre el ESTADO NACIONAL, los Gobiernos Provinciales y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 47.- Ratifícase el Acuerdo suscripto con fecha 26 de mayo de 2016 entre el ESTADO NACIONAL y la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, que como ANEXO II forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 48.- El TESORO NACIONAL, con cargo a Rentas Generales, deberá cubrir un importe equivalente a las sumas que se dejen de detraer como consecuencia de lo convenido en los Acuerdos ratificados en el presente Título, importe que seguirá siendo considerado como referencia a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta por la Ley N° 26.417.

ARTÍCULO 49.- Toda vez que la tasa de interés que deban pagar las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de los acuerdos ratificados en primeros dos Artículos del presente título resultare superior a la tasa BADLAR por CERO COMA CINCO (0,5), la tasa de interés establecida en los acuerdos antedichos deberá ser reemplazada por la tasa BADLAR por CERO COMA CINCO (0,5). La diferencia entre la tasa BADLAR y la tasa efectivamente pagada será abonada por el TESORO NACIONAL.

.ARTÍCULO 50.- En virtud de lo resuelto por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en los fallos correspondientes, dispónese que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS deberá cesar la retención de la cuenta recaudadora del impuesto de la Ley N° 23.349 a la totalidad de las jurisdicciones, del porcentual resultante de la aplicación del Decreto N° 1399/01 que a cada una de ellas le asigna la Ley N° 23.548.

TÍTULO II: Cajas previsionales no transferidas

ARTÍCULO 51.- En cumplimiento de la cláusula duodécima del Compromiso Federal aprobado por Ley N° 25.235, el Estado Nacional, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social, girará de manera mensual y automática a las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación, los importes que resulten necesarios para compensar las asimetrías respecto de aquellas jurisdicciones que transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación.

Las transferencias de fondos deberán ser equivalentes a los desequilibrios que estaría asumiendo la Administración Nacional de la Seguridad Social si el sistema previsional de que se trata hubiese sido transferido a la Nación.

A tales efectos, instrúyese a la Administración Nacional de la Seguridad Social para que, en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, acuerde con cada una de las jurisdicciones la determinación del importe mensual a transferir a cada una de ellas, previa realización de la auditoría de los estados contables y la evaluación del avance en el proceso de armonización.

El importe de la cuota que acuerden las partes será transferido antes del día 20 de cada mes y actualizado semestralmente mediante los coeficientes de movilidad aplicables al S.I.P.A., en los términos de la Ley N° 26.417 y no podrá ser modificado salvo un nuevo acuerdo entre las partes.

En ningún caso la falta de armonización absoluta o las discrepancias respecto del grado de avance en el proceso de armonización de los regímenes no transferidos podrán ser invocadas por el Estado Nacional para suspender las transferencias aquí previstas. En tal supuesto, los giros podrán limitarse hasta la cobertura del déficit que se generaría de haberse logrado la armonización plena del régimen, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del presente artículo.

ARTÍCULO 52.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo Nacional para que, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, propicie la suscripción de convenios interjurisdiccionales tendientes a resolver las controversias entre la Nación y las provincias respecto del financiamiento de los déficits acumulados de los sistemas previsionales no transferidos a la Nación.

Exhórtase al Poder Ejecutivo Nacional y a las jurisdicciones que hubiesen promovido demandas judiciales derivadas de tales controversias a solicitar en forma conjunta la suspensión de los términos procesales durante el plazo previsto en el párrafo precedente.

Facúltase al Poder Ejecutivo a emitir un título destinado a cancelar los pasivos que se determinen.

ARTÍCULO 53.- Establécese un régimen de regularización de deudas por contribuciones patronales destinado a los Estados Provinciales, Municipales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entes Públicos, Empresas Públicas y MIPyMES que actualmente posean con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se encuentre iniciado juicio al respecto o no, por un plazo de CIENTO VEINTE (120) cuotas mensuales, fijándose una tasa de interés en base a la Tasa Pasiva Promedio del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y estableciéndose el plazo para acogerse al presente beneficio hasta el 31 de diciembre de 2017.

La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá ofrecer a los Estados Provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un tratamiento análogo al dispuesto para las Universidades Nacionales por el del Decreto 1571, del 1º de noviembre de 2010. Será condición inexorable de su otorgamiento que la jurisdicción que acepte acogerse al mencionado tratamiento acuerde con la referida Administración Federal de Ingresos Públicos el financiamiento de los vastos que le irroga la recaudación de los impuestos nacionales coparticipables.

ARTÍCULO 54.- Confórmese la Comisión Bicameral de Seguimiento y Asistencia a las Provincias que no han transferido sus Cajas de Jubilaciones y Pensiones a la Jurisdicción Nacional, a los efectos que se formulen las convocatorias pertinentes con el objetivo de elaborar e implementar el reconocimiento de sus déficits, garantizando el justo financiamiento de los sistemas previsionales.

Libro V: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 55. — Las disposiciones de la presente ley son de orden público y entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 56. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Virginia M. García.- María de los Ángeles Sacnun.- María E. Labado.-

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos y de Economía Nacional e Inversión han considerado el expediente CD-24/16 de fecha 16 de Junio de 2016, proyecto de Ley de modificación al Régimen Fiscal y Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, anticipando los motivos del rechazo:

La ley que se pretende sancionar tiene como principal objetivo darle aprobación legislativa a un sinnúmero de propuestas de la más diversa índole que, a pesar de que en la mayoría de los casos podrían ser tratadas con independencia unas de las otras, se presentan todas juntas y entremezcladas. Resulta evidente que el principal propósito por el que el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de Ley de estas características es para ocultar algunos de sus polémicos contenidos. Fuera de esto no existe motivo alguno para su tratamiento conjunto.

Así, bajo el título de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados se proponen acuerdos transaccionales entre la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y los jubilados con sentencia firme, litigios en curso y demandas judiciales potenciales, que resultan en montos de haberes, valores de retroactivos, criterios de actualización y plazos y condiciones de pago de las deudas previsionales más desfavorables a las definidas en los fallos correspondientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es una reparación histórica sino, por el contrario, se trata de aplicar una considerable quita en los haberes de los jubilados que tienen reclamo para el reajuste de sus haberes.

Lo más llamativo del caso es que el ordenamiento jurídico actual permite pagar las sentencias sin necesidad de sancionar una ley. Si el poder ejecutivo quiere cumplir con las sentencias simplemente debe hacerlo, porque además cuenta con la partida correspondiente sancionada en la Ley de Presupuesto. Por otro lado, el Estado Argentino arribó a un arreglo de solución amistosa en la causa Menéndez Caride y otros en sede de la OEA donde se comprometió a aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de todos los casos que sean análogos a los que ya trató la Corte y la resolución 955/08 de ANSES así lo confirma. Más allá de esto, en el caso de sancionarse una Ley para asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos de los adultos mayores, la misma debería legislar respetando lo dictaminado en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia.

Adicionalmente, debería ser la Administración Nacional de Seguridad Social quien encare de manera automática y sin necesidad de establecer acuerdos transaccionales con cada uno de los pasivos afectados en los que éstos renuncian a la posibilidad de accionar judicialmente, el recálculo de los haberes y de la movilidad adeudada en cada caso. El repago de las deudas no puede contener quitas ni resultar desfavorable para los jubilados y pensionados respecto a una acción legal; de lo contrario, la litigiosidad no se reduce.

En esta línea se ha redactado el Título I, Libro I del proyecto de Ley contenido en el presente dictamen: se resuelve pagarle de inmediato y con el presupuesto existente a todos aquellos que tengan sentencia firme. Para acelerar la resolución en el caso del conjunto de los jubilados que están en la actualidad realizando el reclamo se indica a ANSES no apelar las sentencias. En todos los casos el pago del retroactivo y el reajuste deben adecuarse a los criterios marcados por la Corte Suprema de Justicia sin aplicar recorte ni quita alguna. También se establece un plazo para que ANSES realice el recálculo de los haberes e impulse el pago íntegro a quienes tengan derecho a acceder a él, eximiéndolos del trámite judicial. Remárquese además que no sólo el proyecto oficial no realiza una reparación histórica sino que tampoco se trata de una emergencia de litigiosidad ya que se estima que en la actualidad los reclamos no superan los 300.000 casos dentro de un universo cercano a los 7 millones de jubilados.

Asimismo el Poder Ejecutivo Nacional propone crear en reemplazo de las moratorias futuras una Pensión Universal para el Adulto Mayor que establece un beneficio previsional equivalente al 80% del haber mínimo garantizado, a partir de los 65 años tanto para hombres como para mujeres exigible durante los próximos tres años –que es el plazo previsto para el diseño del nuevo sistema previsional- bajo comprobación de situación de vulnerabilidad. Es decir que la promocionada Pensión Universal no es más que la fractura de la integridad del sistema previsional para crear una categoría de “jubilados de segunda”, estableciendo un haber inferior al que obtienen actualmente quienes se acogen a la moratoria, con un tiempo acotado de vigencia y sin otros derechos como el de que el cónyuge “herede” al jubilado bajo la forma de la pensión. Luego de la estatización del sistema de jubilaciones que había sido privatizado, las leyes de inclusión jubilatoria (“moratorias previsionales”) lograron que se alcanzara una cobertura superior al 95% de la población y, junto con la ley de movilidad, consiguieron que nuestros adultos mayores gocen del sistema jubilatorio más amplio y con mayores haberes de toda América Latina.

El proyecto del Poder Ejecutivo también propone la creación de una Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional integrada exclusivamente por miembros del Poder Ejecutivo Nacional. Dicha composición contraviene los requisitos definidos por la propia Constitución Nacional que establece que este tipo de organismos deben contar con representación de los interesados (en este caso de los Adultos Mayores). Se promueve asimismo la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional también en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, al cual se le asignan los objetivos de “elaborar un proyecto de Ley que contenga un nuevo régimen previsional universal,

integral, solidario y sustentable..." en el plazo de tres años (Artículo 12).

el proyecto de ley contenido en este dictamen de minoría a través de la COMISION BICAMERAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL CODIGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL bajo el mandato de que el régimen previsional conserve sus atributos centrales: ser público, solidario y de reparto.

El título V del Libro I del Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo redefine el funcionamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Cabe recordar que el FGS fue creado a través del Decreto 897/2007, bajo el entendimiento de que el Sistema Público de Reparto era un bien público cuya correcta administración revestía absoluta prioridad para el Estado Nacional, dado que el mismo se constituye como garantía de cobertura e inclusión social. Su finalidad prioritaria, tal como quedó explícita en los considerandos del decreto, es "...asegurar que los beneficiarios del Sistema Público de Reparto no se constituya en variable de ajuste de la economía en momentos en que el ciclo económico se encuentre en fases desfavorables, contando a tales efectos con los excedentes producidos en los momentos positivos del ciclo". Luego, la Ley 26.425 del 4 de diciembre de 2008 que dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, transfirió la totalidad de los recursos que integraban las cuentas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización.

El FGS es una poderosa herramienta para el desarrollo económico. Dado que la inversión en Argentina es considerada vital para incrementar el producto y el empleo, las inversiones del FGS en proyectos productivos fomentan y promueven el círculo virtuoso entre crecimiento económico y un incremento sostenible en los recursos de la seguridad social.

Las disposiciones propuestas en el proyecto de Ley remitido por el PEN respecto al FGS propenden el vaciamiento y la extranjerización de dicho fondo. Por un lado, en el Artículo 26 se propone liquidar sus activos para cubrir el flujo mensual de gastos de la ANSES. Esta disposición parece desconocer que, según el Decreto de su creación, los activos del FGS deberían servir para atender a situaciones de emergencia temporal y no para financiar gastos corrientes. Si se utiliza para estos fines, en pocos meses, el FGS podría desaparecer. Dentro del mismo grupo de propuestas, el Artículo 33 deroga la Ley 27.181 que requiere la aprobación de 2/3 de votos del Congreso de la Nación para vender acciones del FGS. Esto no sólo facilita la venta de acciones FGS sino también la reducción y virtual eliminación de la participación accionaria del Estado Nacional en todas las empresas, incluyendo muchas de las que habían sido privatizadas y volvieron a tener participación estatal en la última década. Se trata, por tanto, de una privatización de la propiedad hoy estatal de participaciones en empresas privadas, a la que nos oponemos tajantemente.

Para poder concretar la venta de acciones del FGS sin tener que vender al mismo tiempo títulos públicos para cumplir con las proporciones máximas autorizadas para cada activo, el Artículo 27 del proyecto de ley del PEN habilita a incumplir durante cuatro años los topes máximos de participación de papeles del Estado y los Artículos 28 y 29 modifican los artículos 74 y 75 de la Ley 24.241 cambiando dichos porcentajes.

Por lo tanto, de aprobarse las modificaciones propuestas respecto del uso y composición del FGS se estarían poniendo en riesgo sus rendimientos, pero además se reducen las instancias a través de las cuales el Estado participa de manera colaborativa en las decisiones de las empresas, aportando una mirada de más largo plazo para promover del desarrollo económico y social sustentable. Rechazamos la derogación de la Ley 27.181 y cualquier modificación en la composición del FGS que ponga en riesgo su sustentabilidad futura y/o permita la eliminación de la tenencia de acciones por parte del Estado.

El segundo libro del proyecto de Ley enviado por el PEN apela al llamado “Sinceramiento Fiscal” Dentro de las propuestas fiscales se incluye: un blanqueo que contiene algunas cláusulas inaceptables y se promueve la modificación del impuesto a los Bienes Personales, a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto a las Ganancias.

Acordamos con la propuesta de implementar una exteriorización de activos no declarados pero consideramos que los contenidos del régimen remitido a este Honorable Congreso de la Nación resultan inadecuados. Deben tomarse recaudos para que el presente proyecto de exteriorización de activos no impida el avance de causas que ya se encuentran en curso como resultado de las revelaciones de los denominados “PANAMÁ PAPERS” o las cuentas radicadas en Suiza por el Banco “HSBC”. Por último, el objetivo no debe ser únicamente el “blanqueo” de capitales que fueron fugados al exterior sino además su repatriación. Por otro lado se instruye al Poder Ejecutivo para que cree instrumentos dirigidos a la reactivación de la economía a través de su inversión en proyectos productivos y en la actividad de la construcción. En el Libro II del proyecto de Ley contenido en el presente dictamen se propone un régimen alternativo, inspirado en el que fuera instaurado en el año 2013 a través de la Ley 26.860, en el que quedan excluidos todos los funcionarios del Estado en todas sus jurisdicciones así como sus familiares directos y se excluyen las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior que estuvieran depositados en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países con los cuales Argentina no tenga acuerdos de intercambio de información tributaria hasta el 31 de diciembre de 2015, entre otras medidas. Esta última cláusula busca impedir el blanqueo de fondos ocultos en los llamados “paraísos fiscales”, incluidos Panamá y Suiza.

Finalmente hay que señalar que las modificaciones propuestas en el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo sobre los tributos se destacan por su regresividad. En primer lugar, es cuestionable la propuesta de reducción de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales, tanto

por tratarse de uno de los impuestos más progresivos del esquema tributario vigente, como porque implica en la práctica una fuerte reducción de los pagos futuros que realizarán quienes se acojan al blanqueo. Además de tratarse de un tributo progresivo cabe destacar que es además coparticipable, de modo que afecta también a las Provincias Argentinas. En cambio, entendemos que resulta adecuado modificar la metodología de cálculo de dicho impuesto, cambiando el mínimo exento por un mínimo no imponible, tal como se establece en el Libro III del proyecto de Ley que se presenta en este dictamen.

Respecto del Título III del mismo Libro del proyecto remitido por el PEN, que define un esquema de “premios” para contribuyentes cumplidores, evaluamos que resulta a todas luces inadecuado e innecesario teniendo en cuenta que el pago de los tributos en tiempo y forma es una obligación y como tal, requiere ser cumplida per se. Finalmente, en el título IV, Libro I del proyecto de Ley bajo análisis se ratifican los acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 23 y 26 de mayo de 2016.

En el artículo 92 se pretende traspasar la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Esto es una vieja pretensión del lobby de algunos sectores del poder financiero, que fuera desactivado por una decisión política, que anclaba la investigación del lavado como parte integral de la política criminal y de las políticas de seguridad.

Con este cambio se pretende que el Ministro de Hacienda defina la política criminal contra el lavado de dinero y sus delitos precedentes y controlará la información financiera sobre operaciones sospechosas. Quien define el lineamiento económico no debería definir los mecanismos e instrumentos de persecución del delito económico. En pocas palabras, el proyecto que se presenta busca efectivamente reconocer el derecho de aquellos jubilados que les corresponde un reajuste en sus haberes y un pago retroactivo, sin recortes de ningún tipo. En segundo lugar se amplía la moratoria para seguir incluyendo a los adultos mayores a través del derecho al acceso al haber jubilatorio, sin crear jubilados de primera y jubilados de segunda. En cuanto al “blanqueo” se propone una repatriación de los fondos para su inversión en proyectos productivos y de construcción, excluyendo a los funcionarios de todos los niveles y a sus parientes para evitar que se trate, en realidad, de una autoamnistía. Tampoco se asegura impunidad a los que ya han sido denunciados por sus tenencias en paraísos fiscales. Por último se ratifican los acuerdos alcanzados entre la Nación y las Provincias para la devolución del 15% de coparticipación a lo que se agrega el 1,9% correspondiente a los fallos de la Corte Suprema y una solución para la cuestión de la transferencia de las cajas previsionales.

Virginia M. García.- María de los Ángeles Sacnun.- María E. Labado.-

VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO